

La democracia como identidad restringida

SERGIO ZERMEÑO

El conjunto de ensayos que presentamos en este número de la *Revista Mexicana de Sociología* es producto de una serie de investigaciones sobre diferentes movimientos, luchas sociales, rupturas del orden o simplemente situaciones en las que una parte de la sociedad se opuso a la progresión de ciertas decisiones que la afectaban (o que pensó que la afectaban). Fueron luchas que se desarrollaron en los años ochenta en distintos puntos de la República Mexicana, como el Distrito Federal, Chiapas, Ocoyoacac, Chihuahua o San Luis Potosí. Su común denominador estaba dado por el supuesto de que en estos fenómenos se estaba expresando algún tipo nuevo de democracia al que terminamos refiriéndonos como una “democracia emergente”.

La pregunta es inevitable y fue inevitable para nosotros desde el principio: ¿El término *democracia*, que íbamos a utilizar para describir y analizar estos sucesos, venía al caso por ser un término de moda o porque estábamos efectivamente frente al surgimiento de un nuevo tipo de manifestaciones sociales en el ámbito nacional o, digamos, latinoamericano?

¿No surgió acaso la democracia en la propuesta de los jóvenes argentinos que animaron la reforma universitaria en la ciudad de Córdoba en el año 1917? ¿No fue el cardenismo también expresión de una emergencia popular ante un régimen posrevolucionario dispuesto a olvidar las demandas que habían costado un millón de vidas entre 1910 y 1920? También la Unidad Popular chilena fue una de esas grandes emergencias desde abajo, acompañada por el jolgorio de unos sectores medios que luego atestiguarían atónitos el catastrófico desenlace. Y qué decir de Bolivia 54, de Cuba 59 y de Nicaragua 80. ¿No fueron acaso emergencias volcánicas desde las entrañas de lo popular y de lo nacional en contra de la explotación, de la opresión, de la antidemocracia y del imperialismo?

Un enfoque sobre la democracia emergente en colectividades restringidas (tradicionales y modernas), buscaría destacar las especificidades y las diferencias entre las luchas sociales de abierta ruptura o aquellas que tienden a desplazarse hacia el sistema político e institucional (sindicatos, partidos, parlamento...), por una parte y, por otra, los movimientos sociales de base. Estos últimos constituyen el tipo de acciones sociopolíticas que queremos privilegiar. Diferenciamos estos movimientos de base en dos tipos:

- Los que tienden a formar frentes, uniones, coordinadoras, centrales, alianzas y partidos cuyo objetivo es unificar esos movimientos y manifestaciones con el fin de concentrar un poder que los conduzca a influir en la política nacional y eventualmente al control del Estado, y

- Los movimientos, dirigencias y corrientes que rechazan las estructuras **verticales** de la política y sólo eventualmente participan en centrales, alianzas, frentes o coordinadoras por considerarlos jerárquicos, corruptibles y, en el extremo, una pieza más del sistema de dominación presente (en particular a los partidos políticos).

Estos movimientos, dirigencias y corrientes se proponen trabajar en la base del pueblo, en cada manifestación social de descontento, tratando de resolver, ante los aparatos gubernamentales, las necesidades básicas y demandas fundamentales de esa población movilizada, relativamente reducida y bien definida en su identidad, su adversario y sus problemas (lo mismo da si es una comunidad indígena, una alianza ejidal, un conflicto de tierras, una lucha municipal, una o varias secciones sindicales de obreros o de sectores asalariados medios, una colonia popular, etcétera).

Lo más original de este planteamiento es su afán por evitar las provocaciones y confrontaciones abiertas con el Estado (incluso al buscar solución a sus demandas ante las autoridades públicas); rechaza también cualquier forma jerárquica en el interior del movimiento que pueda conducirlo al autoritarismo, al "descabezamiento" o a la corrupción; cualquier tipo de publicidad o notoriedad inútil de los dirigentes o del movimiento; busca evitar igualmente una adscripción ideológica (trotskista, maoísta, comunista...) que genere suspicacias, rechazos, o que pueda justificar la represión. Al evitar esta adscripción ideológica se separa también de planteamientos que establecen una *ruptura* con el lenguaje de la sociedad en que nacen y con su adversario (cristianismo radical, milenarismo, anarquismo...); por el contrario, estos movimientos de base buscan mantener un lenguaje y un terreno de negociación homogéneos con su adversario.

Observan, en fin, un gran hermetismo alrededor de las contradicciones internas y una disciplina de silencio en torno a las escisiones o expulsiones. Con todo esto tratan de lograr una continuidad en las luchas sociales, ya que la experiencia ha mostrado que las otras formas de acción sociopolítica conducen a la represión, la cooptación y la desintegración del actor movilizado, debidas a su deficiente y transitoria identidad. Esto último es producto de: *a*) la débil cohesión de los actores sociales y de las múltiples tendencias hacia su desarticulación en las sociedades dependientes, es decir, sociedades en cambio histórico en donde las categorías socioocupacionales no están representadas por fuerzas políticas unitarias que se enmarquen a su vez en ideologías correspondientes; *b*) las amplias alianzas a que tienden los movimientos ante un Estado fuerte como el mexicano, alianzas que se desintegran por sí mismas o son fácilmente desmanteladas (por represión-cooptación-solución), una vez que pasa el momento álgido de una coyuntura; y *c*) la vecindad con el imperialismo norteamericano (y su

correlato, la guerra centroamericana), que busca convertir cualquier lucha social por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, en un problema de tipo internacional en donde los actores de ese movimiento y sus dirigencias son rápidamente deslegitimados con la acusación, en la mayoría de los casos risible, de encontrarse coludidos y ser un enclave del comunismo cubano-soviético (o es utilizada toda esta argumentación por el Estado nacional-dependiente para reprimir dichos movimientos).

Tenemos así que, entre los parámetros centrales de las manifestaciones más o menos recientes de esta democracia emergente y restringida, habría que destacar:

a) Una posición *no confrontacionista* y en esa medida defensiva ante la represión endémica venida de la poderosa burocracia gobernante;

b) una *delicada situación internacional* que empuja a las luchas sociales a deslindarse ideológica y políticamente de las corrientes comunistas guevaristas, maoístas (¿reaganistas?), y hasta socialistas que el militarismo americano ha convertido en sinónimo de enclave “cubano-soviético” y que levantan suspicacias gratuitas entre la población movilizada;

c) casi como respuesta a lo anterior, estos movimientos tienden a balancear esa desideologización acercándose a los métodos y contenidos cristianos de base (también protestantes) para el cambio social, o al menos coexistiendo con ellos;

d) tienden igualmente a establecer sus demandas en torno a problemas concretos (agua, abastecimiento, escuela, transporte...), y buscan soluciones para *esta* colectividad en el corto plazo y no para toda la nación dentro de veinte años. Hay también una pragmatización de sus horizontes de demandas y éstos tienden a ser medidos cuantitativamente (más tierra, más empleo, mejores salarios, mejores precios...).

e) La experiencia ha mostrado la discontinuidad de la oposición en general, de los movimientos sociales de pleno enfrentamiento y de aquellos otros que transitan rápidamente hacia el sistema político (partidos, sindicatos, parlamentos, grupos de presión o de interés, etcétera) viviéndose así una destrucción constante de los canales y espacios democráticos. Todo ello ha provocado una permanente supremacía del Estado sobre la sociedad y los movimientos sociales. El planteamiento que ahora analizamos tiende a “construir” a los actores en un “nivel restringido”, “basista”, por debajo de las clases y de los grandes actores históricos (clase obrera, campesinado, masas, estudiantes, etcétera), y siguiendo una tendencia inversa a la seguida por lo general en México y en América Latina de ir de estos macronúcleos sociales “hacia las alturas” (hacia el sistema político y hacia el Estado en busca de representación y de influencia).

La combinación de una postura *no confrontacionista* y una *mayor continuidad* en la acción social (derivada de la primera) constituye, en fin, el mejor soporte para la consolidación de una nueva etapa, una etapa emergente y estructuralmente diferente de la democracia en América Latina.

En México se ha visto muy retrasada la formación de este tipo de

movimientos democráticos y ello se explica por varias razones: por un lado, por la herencia de la Revolución mexicana materializada en un Estado fuerte y su simbiosis con un sistema político en donde el partido del Estado ocupa todavía espacios monopólicos. Por otro lado, pero en estrecha relación con lo anterior, por la discontinuidad de las luchas, movimientos o corrientes que regularmente terminan estrellándose contra el muro del Estado y de la represión o terminan siendo cooptados, o ambas cosas. Es como resultado de la desaparición rápida de los actores de oposición o que el Estado mexicano ha podido históricamente darse lujos reformistas y ha terminado capitalizando e incorporando el descontento, las demandas y a los actores movilizadas, aunque el costo en recursos fuera alto. Por otra parte, con la reciente aparición del petróleo, el populismo mexicano pudo atender una serie de demandas de amplios sectores y mantenerse firme en medio de estos espacios de participación y de influencia que han caracterizado increíblemente a nuestro dilatado sistema político hasta entrados los años ochenta.

En esto nos hemos diferenciado del resto de América Latina, pero también es cierto que hoy, con la crisis, los senderos comienzan a convergir.

Por lo que se refiere a los ejemplos concretos, cabe aclarar que no tienen un estatuto similar no todos recrean los rasgos de una democracia emergente, de una democracia como identidad restringida, tal como la definimos anteriormente. En ocasiones incluso, como en el caso de Chihuahua analizado por Alberto Aziz, a pesar de una enorme emergencia de lo nuevo desde lo social, el ejemplo se aleja por completo de ese paradigma para subrayar, por contraste, el triunfo de los vicios del sistema político mexicano sobre los brotes antiautoritarios y anticentralistas de unas clases medias demasiado atraídas por el *American Way of Life*.

Lo mismo se podría decir del movimiento cívico electoral de Nava Martínez en San Luis Potosí (1981-1986) narrado por Carlos Martínez Assad. El regionalismo, el tradicionalismo religioso, una herencia de guerra contra el Estado revolucionario, etcétera, ¿son ingredientes compatibles con nuevas formas emergentes de hacer política?

Con todo lo combativo que ha sido *electoralmente* el "movimiento" navista, es difícil afirmar que estamos ante una expresión de las nuevas formas de hacer política. En realidad, una vez descalificado el caudillo (por represión en 1960 o por la legislación electoral en 1984), parece diluirse también la plataforma social que lo sustentaba al grado de no poder ni siquiera capitalizar los errores cometidos por la gubernatura priista.

Son quizás el "Movimiento de Pueblos y Colonias del Sur del Distrito Federal", analizado por Rosa Linda Arau, y el movimiento del municipio de Ocoyoacac en el estado de México, los casos que mejor recrean los aludidos atributos de continuidad, negociación y solución de necesidades inmediatas. Sin embargo, es la exposición de Marie-Odile Marión sobre las luchas de los pueblos de Chiapas por su emancipación, en donde encontramos la mayor tensión entre nuevas formas de la acción social y viejas formas

de dominación sociopolítica. En palabras de la autora: “*Durante años, los intentos de homogeneización de criterios y formas de lucha abortaron repentinamente a nivel de dirección o en fases iniciales de coordinación, traduciendo la fragilidad de las estrategias organizativas populares ante el implacable rigor del aparato de sujeción erecto por la oligarquía terrateniente regional con la complicidad de las autoridades políticas estatales. Sin embargo, se está vislumbrando en Chiapas un nuevo modelo de lucha social que otorga más representatividad y fuerza de expresión a los actores sociales que se solidarizan con él. Las alianzas efímeras pero virtuales entre varias líneas políticas de proyecto democrático, miembros de la pastoral diocesana de tendencia progresiva y ciertos representantes de la burocracia federal, han contribuido a cimentar las bases de un nuevo plan de acción colectiva que se extiende progresivamente con errores y fracasos, pero también con resultados alentadores para quienes orgánicamente participan o periféricamente observan.*”

El más reciente en términos cronológicos es el movimiento de los damnificados por el sismo de 1985 de la Unidad Habitacional Tlatelolco. Los comités y asociaciones de residentes preocupados desde tiempo atrás por el abandono administrativo y arquitectónico de los edificios vivían en la típica contradicción de la clase media de nuestro país: empezar a reivindicar su individualismo consumista, su autoritarismo, y al mismo tiempo exigir del Estado la solución integral de sus problemas. Para ellos, la tragedia de septiembre es como el remate de cuatro años de crisis centelleante, de caída drástica de los niveles de vida, de retraimiento brutal de los subsidios gubernamentales, de renovación acelerada de los habitantes de la Unidad, de debilitamiento subsecuente de su identidad, etcétera. Ignacio Marván y Aurelio Cuevas se preguntan cuáles fueron los efectos de la catástrofe de septiembre sobre una población con estas características, y cómo se han organizado para defender sus intereses a partir de entonces.

Sin pretender que los trabajos que presentamos a continuación formen un conjunto orgánico, con una y la misma problemática, sí los sugerimos como una muestra representativa de las luchas sociales recientes, como una serie de fenómenos que ligan el asunto de la democracia a la vida de una comunidad circunscrita, buscando responder a la pregunta sobre si estamos ante la emergencia de nuevas formas democráticas en nuestro país.

Queremos agradecer, en fin, el impulso que Pablo González Casanova ha sabido imprimir al estudio de las luchas sociales y de la democracia emergente en América Latina con los auspicios de la Universidad de las Naciones Unidas y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.